

El Gobierno afronta un 'tsunami' de pleitos por su injerencia en Talgo

LITIGIOS EN ESPAÑA Y FUERA/ Un bloqueo a la opa de MaVag por el Gobierno abrirá un reguero de pleitos a todos los niveles: contra el Ejecutivo, la CNMV, los funcionarios del Jinvex, en España y a nivel europeo.

Miguel Á. Patiño / C.Morán.
Madrid

La injerencia del Gobierno en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Ganz-MaVag sobre Talgo, entorpeciendo esta oferta y, eventualmente bloqueándola, va a desencadenar con toda probabilidad una ola de litigios.

No solamente contra representantes directos del Gobierno. También contra los organismos que han ejecutado la denegación del permiso o sus funcionarios. La ola de pleitos se podría extender a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así lo aseguran fuentes jurídicas que están pendientes del desarrollo de los acontecimientos en una operación que, en contra de toda lógica, se ha aderezado con un alto componente político que va más allá de lo puramente empresarial.

Varios bufetes de abogados, españoles y extranjeros, afilan armas de cara a una guerra legal no sólo a nivel doméstico. También en el ámbito de la Unión Europea. Además del frente judicial y administrativo español, se prevé que se abran causas ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE.

Cuenta atrás, 9 de agosto

La cuenta atrás para que el Gobierno autorice o no la opa de Ganz-MaVag ha empezado. A mediados de agosto, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un organismo que depende del Ministerio de Economía, debe decidir si aprueba o no la opa, o si la aprueba con condiciones.

Fuentes jurídicas explican que, más concretamente, el Jinvex debe pronunciarse el 9 de agosto como tarde.

El Jinvex es el organismo que se creó cuando el Gobierno reforzó la normativa para proteger activos que considera estratégicos para la economía nacional. Además de por su actividad, un movimiento accionarial de más del 10% en Talgo necesita la aprobación del Jinvex por ser una empresa cotizada.

El Jinvex lo forman una presidencia, a cargo de la Dirección General de Comercio



Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.



Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.



Oscar Puente, de Transportes.

Internacional e Inversiones –a cuyo frente está ahora Alicia Rocío Varela–, un vocal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y un representante de la Dirección Operativa del área de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Además, hay un representante de cada ministerio con rango de subdirector general.

Silencio negativo

Se puede dar la circunstancia de que el Jinvex no emita dic-

Empieza la cuenta atrás: si el Jinvex no se pronuncia, el 9 de agosto empezará el zafarrancho legal

tamen, lo que en la práctica equivale a un "no", ya que en el procedimiento de ese organismo aparece el silencio administrativo negativo.

Se desataría así de forma automática la batalla. El Gobierno ya ha expresado abier-

tamente que no ve con agrado la opa de Ganz-MaVag. Incluso ha maniobrado para que decaiga, animando a otros grupos a armar una o varias ofertas alternativas.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, afirmó que "estamos a la espera de otros actores" en la puja por Talgo. Dijo que podría haber otras ofertas sin el auspicio del Gobierno, pero si hubiera que auspiciarlas, se valoraría esa opción. El Gobierno ha sondeado a grupos como Crite-

ria y Escribano, así como a grandes patrimonios españoles. De momento, lo único que ha conseguido es que entre en escena el grupo checo Skoda, que no ha planteado una contraopa, sino una "combinación industrial", sin números concretos.

Bufetes al máximo nivel

Ganz-MaVag suma un puñado de bufetes que le ayudaron a la opa, todos ellos de máximo nivel –Garrigues, Cuatrecasas y CMS Albiñana & Suárez de Lezo– y cada uno especializado en un ámbito (opas, Jinvex y ámbito europeo, respectivamente).

En paralelo, 8.000 pequeños inversores también se han empezado a movilizar. La Asociación de Accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas no descarta acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado.

Los expertos estiman que la destrucción de valor de Talgo por la injerencia del Gobierno puede suponer 300 millones, que puede ser la base para reclamaciones legales.

No se descartan procedimientos contra Skoda, o que el fondo Trilantic, que controla el 40% de Talgo con otros socios y ha aceptado la opa de Ganz-MaVag, reclame daños en nombre de la decena de fondos que representa.